

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA CAV PARA 2016

Valoración del sindicato LAB

2015-11-30



www.lab.eus

ÍNDICE

La parálisis presupuestaria de Lakua delata el desinterés del PNV por revertir los recortes sociales.....	5
Corresponsabilidad autonómica en las estrecheces presupuestarias.....	5
Disminuye el peso del gasto social en el presupuesto.....	7
El gasto social evoluciona en dirección contraria a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad.....	8

La parálisis presupuestaria de Lakua delata el desinterés del PNV por revertir los recortes sociales

El proyecto de presupuestos presentado por el ejecutivo de Urkullu para el año 2016 mantiene el grueso de los recortes que comenzaron a aplicarse en 2010. De esta manera, el actual gobierno reafirma su compromiso con la contención del gasto público, y da así continuidad a la estrategia de desgaste (iniciada en la legislatura de Patxi López) contra las prestaciones sociales y los servicios públicos esenciales.

Al parecer, las mal llamadas políticas de “austeridad” también forman parte del acuerdo de estabilidad institucional que mantiene al PNV maniatado al PSE. En todo caso, las cuentas públicas de 2016 son un fiel reflejo de la atrofia presupuestaria que invade el Gobierno de Lakua, a juzgar por las pocas novedades incorporadas, claro está, si exceptuamos el desproporcionado incremento de los pagos por amortización de deuda que crecerán un 25,4%.

El presupuesto para 2016 asciende a 10.933,3 millones de euros, lo que supone 294,3 millones más que en el actual ejercicio. Sin embargo, el volumen de deuda que se prevé devolver aumentará en 181 millones, una operación que absorberá el 61,5% del aumento presupuestario. Por tanto, una vez descontado el reembolso de la deuda, el incremento del gasto realmente disponible para sufragar las políticas del gobierno se queda en poco más de 113 millones, lo que representa un minúsculo 1,1% más que en 2015.

Además, una parte importante de este aumento del presupuesto operativo irá destinada a gastos de personal. La asignación a este capítulo aumenta en 34,4 millones y contempla una subida salarial para el personal de la administración del 1%, así como la recuperación de un 25% de la paga extra suprimida en 2012, dejando pendiente otro 50%. Esta decisión ha sido tomada por el gobierno de forma unilateral y resulta manifiestamente insuficiente; porque perpetúa la pérdida de poder adquisitivo soportada tras la rebaja salarial media del 5% en 2010 y las sucesivas congelaciones aplicadas durante los cinco años siguientes.

En definitiva, el planteamiento adoptado por el ejecutivo jeltzale prácticamente equivale a prorrogar los presupuestos vigentes, porque deja muy poco margen de maniobra para mejorar la calidad de los servicios públicos, afrontar las crecientes necesidades de nuestra sociedad, o impulsar la reactivación económica y el empleo.

Pero sin duda, lo más bochornoso es la disparidad que existe entre el esfuerzo adicional destinado a cumplir con las exigencias de la deuda pública, y el exiguuo aumento del resto de gastos dedicados a financiar los programas que conforman la acción de gobierno.

Corresponsabilidad autonómica en las estrecheces presupuestarias

Una vez descontado el Cupo a pagar al Estado, las Diputaciones dispondrán de 9.103 millones para financiar el presupuesto de la CAV, es decir, unos 365 millones más que en 2015. A pesar de ello, el gobierno trata de justificar las estrecheces presupuestarias alegando que la reducción del objetivo de déficit recorta su capacidad de endeudamiento neto en 241 millones.

Sin embargo, es oportuno denunciar que algunas decisiones del PNV también han contribuido a tejer la camisa de fuerza que ahora limita la disposición de más recursos.

En primer lugar, y según fuentes gubernamentales, en el ámbito foral (controlado por el PNV en coalición con el PSE) no habrá ninguna reforma fiscal de calado que tenga incidencia en la recaudación de 2016. Esto confirma que la coalición PNV-PSE ha decidido mantener la actual estructura impositiva, en lugar de corregir su política fiscal con el fin de lograr un reparto más justo de las cargas tributarias y alcanzar un nivel de recaudación adecuado a las necesidades reales en servicios y prestaciones públicas.

Presupuestos de la Administración General de la CAV - Clasificación funcional

PRESUPUESTO DE GASTOS (miles de euros)	Proyecto	Presupuesto		
Políticas de gasto	2016	2015	Dif.	% var.
Deuda Pública	1.170.217,6	989.517,4	180.700,2	18,3%
Alta Dirección de la C. Autónoma y del Gobierno	49.999,5	49.437,3	562,2	1,1%
Administración General	183.269,2	202.896,6	-19.627,4	-9,7%
Relaciones Exteriores	50.733,8	47.608,4	3.125,4	6,6%
Justicia	173.602,2	167.696,2	5.906,0	3,5%
Seguridad y Protección Civil	612.138,4	606.489,5	5.648,9	0,9%
Seguridad y Protección Social	637.408,3	636.290,1	1.118,2	0,2%
Promoción Social	351.207,6	338.742,7	12.464,9	3,7%
Sanidad	3.416.188,4	3.390.005,4	26.183,0	0,8%
Educación	2.525.743,7	2.490.388,7	35.355,0	1,4%
Vivienda y Urbanismo	112.609,9	110.722,8	1.887,1	1,7%
Bienestar Comunitario	39.039,1	39.915,9	-876,8	-2,2%
Cultura	184.228,8	180.121,4	4.107,4	2,3%
Otros Servicios Comunitarios y Sociales	23.980,4	11.742,2	12.238,2	104,2%
Promoción del Euskera	104.444,3	103.260,2	1.184,1	1,1%
Infraestructuras Básicas y Transportes	634.455,0	632.223,9	2.231,1	0,4%
Comunicaciones	19.856,5	19.754,3	102,2	0,5%
Investigación Científica, Técnica y Aplicada	218.383,3	206.541,1	11.842,2	5,7%
Información Básica y Estadística	14.327,0	14.226,1	100,9	0,7%
Regulación Económica	28.601,8	28.619,8	-18,0	-0,1%
Regulación Financiera	10.573,3	10.381,7	191,6	1,8%
Agricultura, Ganadería y Pesca	111.621,7	110.298,0	1.323,7	1,2%
Industria	109.600,9	104.268,8	5.332,1	5,1%
Energía	909,9	927,1	-17,2	-1,9%
Turismo	13.557,1	13.597,5	-40,4	-0,3%
Comercio	50.542,6	50.384,2	158,4	0,3%

Relaciones Finan. con el Sector Público Vasco	86.058,5	82.901,7	3.156,8	3,8%
GASTO TOTAL	10.933.299,0	10.638.959,0	294.340,0	2,8%
Gasto Total SIN Amortización de Deuda	10.040.968,4	9.927.633,0	113.335,4	1,1%
GASTO SOCIAL	7.394.850,6	7.301.189,4	93.661,2	1,3%

Por otro lado, el gobierno liderado por Urkullu ha demostrado ser un alumno aventajado de la troika a la hora de conceder prioridad absoluta al pago de la deuda y los intereses, por encima de cualquier otra necesidad presupuestaria, incluido el gasto social. En este sentido, es obligado preguntarnos, ¿quién soporta realmente el peso de la supuesta austeridad?

También cabe recordar que la CAV fue una de las pocas Comunidades Autónomas que cumplió con el objetivo de déficit en 2014, junto con Navarra, Canarias y Galicia. Además, el volumen de deuda acumulada representa el 15,4% del PIB: el nivel más bajo después de la Comunidad de Madrid (13,3%) y muy inferior a la media autonómica (23,7%).

Por último, es cierto que el objetivo de estabilidad fijado para 2016 ha reducido el límite de déficit al 0,3% del PIB (el 0,7% para 2015). Incluso se podría argumentar que el Estado dispone de todo un arsenal de medidas coercitivas para obligar a cumplir por la fuerza las reglas de disciplina fiscal, incluida la intervención de las finanzas autonómicas al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Pero a nadie se le escapa que, aún contando con las finanzas autonómicas más saneadas del Estado, el objetivo de déficit establecido para la CAV es exactamente el mismo que para el resto de las comunidades. Por tanto, se desvanece el mito del Concierto Económico como mecanismo bilateral, ni siquiera para coordinar con el gobierno central los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.

En realidad, bajo los disfraces de la bilateralidad y la foralidad lo que se esconde es una relación de subordinación político-administrativa con respecto al Estado. Prueba de ello son los 1.200 millones de euros que Lakua reclama al gobierno central, y Madrid se niega a pagar, como consecuencia de las discrepancias surgidas desde 2008 en torno al cálculo y la liquidación definitiva del Cupo. Esta cifra representa el 11% del presupuesto total de la CAV.

Disminuye el peso del gasto social en el presupuesto

Según el gobierno, en el presupuesto para 2016 se han reforzado los gastos orientados a políticas sociales; sin embargo, sería más honesto reconocer que dicho refuerzo es muy pequeño e insuficiente para subsanar la política de ajustes.

El gasto social¹ se agrupa en dos grandes bloques o áreas funcionales denominadas *Seguridad, Protección y Promoción Social* y *Producción de Bienes Públicos de Carácter Social*; y el importe total destinado a las mismas asciende a 7.394,8 millones euros, es decir, un 1,3% más que la cantidad inicialmente prevista para 2015.

No obstante, es conveniente advertir que en 2016 el esfuerzo presupuestario dedicado a gastos sociales sufrirá una

¹ En estas dos grandes áreas de gasto social se integran las siguientes políticas de gasto: Seguridad y Protección Social, Promoción Social, Sanidad, Educación, Vivienda y Urbanismo, Bienestar Comunitario, Cultura, Otros Servicios Comunitarios y Promoción del Euskera.

considerable reducción. Concretamente, en 2015 el 68,6% del presupuesto total de gastos estaba reservado a políticas sociales, mientras que el próximo año este porcentaje disminuirá al 67,6%. De hecho, sólo para blindar la importancia del gasto social y mantener el mismo peso que tenía en los presupuestos de 2015, sería preciso invertir más de 108 millones adicionales en los programas de contenido social.

Por tanto, es evidente que el componente social de los presupuestos y el “compromiso con las personas” están subordinados a otras prioridades, como son el pago de la deuda o las obras del TAV, un proyecto irracional que acapara el 69% de los recursos para inversiones reales.

El gasto social evoluciona en dirección contraria a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad.

El esfuerzo financiero que el Gobierno Vasco realiza en políticas sociales describe una clara tendencia descendente, un hecho que tampoco resulta nuevo. El gasto social ha sido sometido a constantes recortes desde el año 2010, cuando comenzó a imponerse la política de sacrificios en un contexto de plena crisis y shock económico.

Según los datos de ejecución presupuestaria, el volumen de gasto social realmente ejecutado alcanzó su máximo histórico en 2009. Desde entonces el porcentaje del presupuesto asignado a protección social no ha dejado de caer, pasando del 73,9% en 2009 al 67,6% en el presupuesto para 2016.

Evolución del gasto social en los presupuestos de la CAV

GASTO SOCIAL	Ejecución presupuestaria						Ppto.	Proyecto
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Millones de euros	7.610,0	7.477,3	7.535,4	7.516,8	7.032,9	7.189,9	7.301,2	7.394,8
% sobre Gasto Total	73,9%	72,4%	74,1%	73,4%	73,4%	71,5%	68,6%	67,6%

Por otro lado, el presupuesto de políticas sociales para 2016 registra una merma por valor de 215 millones de euros si lo comparamos con la cuantía realmente ejecutada en 2009. Sin embargo, es importante precisar que este cálculo no refleja la verdadera magnitud de los recortes acometidos durante los últimos años en el área social.

Para realizar una comparación en términos homogéneos debemos tener en cuenta que entre los años 2011 y 2012 entraron en vigor los traspasos de nuevas competencias², y que la inmensa mayoría de estas transferencias se encuadra en el ámbito de las políticas sociales.

A día de hoy, la valoración de estas competencias de naturaleza social ronda los 400 millones de euros. Esto significa que las Diputaciones descuentan esta cantidad del cupo a pagar al Estado, y realizan una aportación extra al Gobierno Vasco por el mismo importe para financiar el gasto en esas nuevas competencias. Por tanto,

² Nuevas competencias trasferidas en 2011 y 2012: políticas activas de empleo, funciones y servicios del Instituto Social de la Marina, inspección de trabajo y seguridad social, expedientes de regulación de empleo, profesorado de religión, sanidad y maestros en instituciones penitenciarias, homologación y convalidación de títulos y estudios, propiedad intelectual, enseñanzas náutico-pesqueras y buceo profesional, transporte marítimo, gestión de archivos de titularidad estatal, y turismo.

comprobamos que la cuantía de los recortes aplicados en el ámbito de las políticas sociales se encuentra en torno a los 615 millones con respecto al gasto ejecutado en 2009, lo que supone un 8% menos.

No está de más recordar que las políticas sociales cumplen una función redistributiva esencial para poder construir una sociedad más justa. Su principal objetivo consiste en combatir la pobreza y las desigualdades, aumentar la equidad en la distribución de la renta, garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, y posibilitar el ejercicio efectivo de derechos económicos, sociales y culturales.

Pero los duros recortes aplicados durante las últimas legislaturas están provocando efectos muy negativos sobre las políticas de protección social y su capacidad redistributiva. Y no resulta en absoluto lógico que el esfuerzo en gastos sociales disminuya precisamente cuando las necesidades en este campo son cada vez mayores.

Fruto del ataque al que están siendo sometidas las políticas sociales, comprobamos que los mayores "ahorros" presupuestarios proceden de la reducción del gasto en Educación, Sanidad, y Vivienda.

La política educativa es una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, y promover el desarrollo personal y social. A pesar de ello, el presupuesto de Educación para 2016 está dotado con 2.525,7 millones de euros; por tanto contará con 246,4 millones menos que en 2009, es decir, un 9% menos en términos relativos.

En Sanidad se han comprometido 3.416,2 millones de euros, lo que supone una reducción de 121,8 millones respecto al presupuesto ejecutado en 2009 (un 3,4% menos). Bajo estas restricciones resulta imposible afrontar con éxito los retos que tenemos planteados en este ámbito; como por ejemplo, el progresivo envejecimiento de la población, mejorar la calidad de los servicios, o aumentar el potencial investigador e innovador.

Los programas de Vivienda y Urbanismo reciben un total de 112,6 millones de euros, prácticamente la mitad de lo invertido en 2009. Ciertamente, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de la demanda solvente, la actividad constructora se ha resentido. Pero la administración está obligada a aumentar la inversión para ampliar el parque público de viviendas de alquiler, de lo contrario corre el riesgo de defraudar las expectativas creadas con la recién aprobada Ley de Vivienda.

Gasto en políticas sociales - Presupuestos de la CAV

<i>(Millones de euros)</i>	Ejecución presupuestaria						Ppto.	Proyecto
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Seguridad y Protección Social	472,1	543,1	587,3	566,5	556,2	591,4	636,3	637,4
Promoción Social	188,7	89,7	394,5	530,8	345,3	308,4	338,7	351,2
Sanidad	3.538,0	3.536,6	3.398,8	3.357,8	3.294,0	3.336,6	3.390,0	3.416,2
Educación	2.772,1	2.688,6	2.639,5	2.553,3	2.405,3	2.512,4	2.490,4	2.525,7
Vivienda y Urbanismo	223,1	187,0	127,0	150,4	128,2	109,8	110,7	112,6
Bienestar Comunitario	55,3	89,9	67,4	50,4	34,7	35,5	39,9	39,0
Cultura	239,7	238,2	224,1	210,6	187,5	206,2	180,1	184,2
Otros Servicios Comunitarios	17,9	9,2	7,6	18,1	9,0	9,4	11,7	23,9
Promoción del Euskera	103,1	95,0	89,1	78,9	72,7	80,3	103,3	104,4
GASTO SOCIAL TOTAL	7.610,0	7.477,3	7.535,4	7.516,8	7.032,9	7.189,9	7.301,2	7.394,8

Pero además, hay otras políticas de carácter social que también han sido severamente castigadas por los recortes realizados en comparación con el nivel de gasto ejecutado en 2009. En concreto nos referimos a: Bienestar Comunitario, que soporta una rebaja del -29,4% y afecta fundamentalmente a partidas relacionadas con la protección al medio ambiente; y Cultura, cuyo crédito se reduce en un 23,2%.

Por otro lado, la asunción de competencias en políticas activas de empleo es la razón que explica el aumento del gasto en programas de Promoción Social. El gasto en Otros Servicios Comunitarios también crece a causa de las elecciones autonómicas del próximo año.

Euskal Herria, 30 de noviembre de 2015